

Colombia: ¿colapso o sólo debilidad?

Ángel Pérez González

Con frecuencia se minusvalora, tanto en Estados Unidos como en Europa, la importancia de Colombia. Un país de dimensión notable, con 42 millones de habitantes, bien situado en el punto de encuentro entre las dos Américas es, de entrada, un actor internacional relevante. Si además está aquejado de graves problemas de orden público, es necesario considerarlo como una cuestión de interés estratégico elevado. En el espacio latinoamericano es un Estado clave en la seguridad y la economía regional. Para europeos y estadounidenses constituye además un riesgo que es necesario gestionar adecuadamente.

La crisis de la seguridad internacional ha obligado a prestar una atención excepcional a aquellos Estados cuyo colapso ha generado bolsas de inseguridad alarmantes. El caso de Afganistán, por ejemplo, así como el de algunos Estados africanos, como Sudán. Este fenómeno parece haber fijado en el imaginario público ese tipo de Estados en áreas lejanas y relativamente ajenas al espacio geográfico de cultura occidental. Resulta sorprendente que se tienda a considerar el caso colombiano como menos grave, estando como está inserto en el mundo occidental y a tan sólo dos horas de vuelo desde Florida, EE UU.

Colombia merece una atención especial. Y un primer aspecto a dilucidar de su realidad es si efectivamente es un Estado en vías de colapso o, sencillamente, un Estado débil, característica esta última que no lo alejaría en exceso de otros Estados latinoamericanos. De la consideración que merezca su situación dependerá la política a seguir por Europa y EE UU y la actitud de sus vecinos, a quienes la situación de Colombia genera temor.

Una debilidad histórica

Como sucedió en casi todos los Estados latinoamericanos, la independencia fue seguida de un período de inestabilidad política, social y económica intensa. Las diferencias entre unas regiones y otras, antes aglutinadas en el imperio español, pero ahora forzadas con frecuencia a formar parte de Estados nuevos y de legitimidad discutible, fue resuelta en un principio con la implantación de estructuras políticas federales. Su fracaso llevó a menudo a reforzar la presidencia del Estado y a centralizar el ejercicio del poder. También esta opción fracasó. La debilidad del Estado se basaba en la premura de medios y en su incapacidad para englobar intereses diversos. A principios del siglo

XX Colombia continuaba sumida en el desorden y, tras la guerra de los mil días, en el descrédito internacional. La separación de Panamá se debió en gran parte a esa debilidad. A mediados del siglo un nuevo enfrentamiento (La violencia) generó más de 200.000 muertos. Hoy Colombia sigue siendo conocida por la violencia civil. Un comienzo lastimoso del siglo XXI.

Sin embargo, la persistente violencia cíclica ha creado una imagen distorsionada de la realidad histórica colombiana. De hecho Colombia ha sido uno de los Estados más estables, prósperos y democráticos del continente. Y no toda esa tradición se ha perdido. Colombia sigue contando con una clase empresarial activa, artistas internacionales, una clase media agazapada y una identidad indiscutible. Elementos todos ellos que favorecen la solidez de un Estado y en los que hay que buscar la extraordinaria resistencia del sistema político en circunstancias tan adversas. Hay Estado, existe una sociedad civil activa, existen medios de comunicación dinámicos, posee una economía robusta y las diferencias raciales o étnicas no son elevadas o, en su caso, no son demasiado trascendentes. El mestizaje es una característica común y las tensiones sociales en

el pasado se explican mejor atendiendo a lealtades partidistas, religiosas o locales (vinculadas con frecuencia a la propiedad de la tierra) que a cuestiones vinculadas con la raza. Pero junto a este bagaje, existe un aspecto de la tradición política colombiana pernicioso. Se trata del escaso interés que los problemas nacionales han generado en la clase política. A pesar de la fuerte identidad cultural, la identidad política de la nación siempre ha sido débil y ha estado sometida a intereses locales o corporativos. Así se explica que la frecuente ruptura del orden público o la violación de la ley hayan sido poco o nada perseguidas.

Ahora bien, este estado de debilidad estaba lejos del colapso. Será un fenómeno nuevo el que situará a Colombia en una situación crítica que tardó en detectarse y todavía carece de solución. Se trata del tráfico de drogas que a finales de la década de los 60 y principios de los 70 comenzó a convertirse en un fenómeno corriente.

El narcotráfico

A lo largo de los años setenta el tráfico de marihuana se benefició de factores diversos: el crecimiento de la población joven en los EE UU, la idea extraña de que

se trataba de un producto esencialmente inocuo y la convicción en Colombia de que tal tráfico y las pequeñas mafias que lo regentaban eran incapaces de poner en peligro la estabilidad del país. Los ochenta oscurecieron este panorama al incorporar a este tráfico la cocaína, pero el Estado y la sociedad, a la que aflúan ingentes cantidades de dinero, no reaccionaron.

a pesar de la violencia,
Colombia ha sido uno de los
Estados más estables,
prósperos y democráticos de
América

Se trataba de un problema norteamericano y europeo, es decir, de demanda, sobre el que Colombia poco podía hacer. Sin embargo las circunstancias empezaron a ser notoriamente graves cuando los primeros personajes públicos opuestos a esta actividad fueron asesinados: el ministro de justicia Lara Bonilla en 1984 y el candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Ya era demasiado tarde.

El chantaje había comenzado. La amenaza de muerte comenzó a socavar la solidez de las instituciones colombianas, a medida que

sus funcionarios y responsables se plegaban a las exigencias de los criminales. El objetivo principal de los cárteles fue el sistema de justicia, que entró, tras el asesinato de varios miembros de la Corte Suprema en 1985, muy pronto en crisis. Los asesinatos de jueces de menor entidad se generalizaron, al tiempo que las inversiones de narcotraficantes empezaron a inundar el sistema económico formal, por ejemplo comprando cafetales; y afectando a

un aspecto pernicioso de la política colombiana es el escaso interés que los problemas nacionales han generado en la clase política

todos los ámbitos de la vida colectiva, por ejemplo la compra de equipos de fútbol. La corrupción comenzó a afectar a la policía y al propio ejército. Había llegado el momento de reaccionar, algo que no iba a ser fácil. La campaña electoral de 1990, celebrada ya con la evidencia de que el control criminal del Estado parecía imparable, se saldó con la muerte de cuatro candidatos presidenciales (entre ellos Galán) y la voladura del periódico *El Espectador*. El origen de acciones tan violentas fue el narcotraficante Pablo Escobar,

que para forzar a Cesar Gaviria, presidente tras la campaña de 1990, se dedicó a secuestrar a miembros de las familias más importantes del país. Su objetivo no era otro que condicionar el enunciado de la nueva constitución con objeto de que aquella prohibiera la extradición de criminales. Encarcelado en 1991, escapó de su prisión y fue asesinado en 1993. Tras su fuga el gobierno colombiano había pedido ayuda a los EE UU, iniciando una cooperación que, con formas diversas, nunca ha cesado a pesar de las dificultades. Debe recordarse a ese respecto la problemática relación entre ambos países tras la llegada a la presidencia colombiana de Ernesto Samper en 1994 (Samper llegó a ver revocado su visado de entrada en EE UU en 1996).

El Estado en peligro

La situación de Colombia es, desde finales de los años noventa, la propia de un Estado en proceso de colapso. Los índices de violencia alcanzan niveles extraordinarios. Fuerzas paramilitares y guerrilleras campan a sus anchas por gran parte del país sembrando el pánico y violando todos los derechos fundamentales imaginables. El narcotráfico continúa siendo una actividad robusta y base de la

economía de los grupos guerrilleros. Los cargos públicos viven atemorizados y los secuestros se han convertido en fenómenos normales (más de tres mil anuales desde 1998). La actividad económica interior se ha resentido, al no ser ya seguras las comunicaciones. A pesar de la situación, pasarían años antes de que la imagen idealizada de grupos guerrilleros como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) perdieran ese halo de romanticismo e idealismo que retenían en la imaginación de muchos, tanto en Colombia como en terceros países.

Trasladándose de un lugar a otro, como han hecho tradicionalmente las FARC, atacando vías de transporte de energía, como ha hecho el ELN (Ejército de Liberación Nacional), o viviendo en parte de las aportaciones de granjeros y comerciantes que desean su protección, como han hecho las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), todos los grupos son esencialmente bandas criminales comunes capaces de aprovechar la escasez de recursos del Estado. No dominan de forma efectiva y permanente mucho terreno, pero tampoco lo hace el Estado. Tener la mitad del Estado fuera de control significa que el gobierno carece de medios para vigilarlo y las guerrillas lo pueden atravesar con

relativa facilidad. La concentración de la población en las ciudades, el 70%, facilita esa movilidad.

A pesar de ello hay razones para el optimismo. Algunos factores demuestran que el Estado no se ha colapsado. La vida en las ciudades sigue siendo razonablemente normal, la economía sigue siendo robusta, y la democracia continúa funcionando, permitiendo la alternancia en el poder, en 2002 fue elegido presidente Álvaro Uribe; y manteniendo viva la esperanza de que el poder constituido sea capaz de buscar soluciones. La sociedad no siempre responde. El referéndum para modificar la constitución, celebrado en octubre de 2003, fue un fracaso, a pesar de las razonables propuestas de cambio. Pero el propio referéndum y las elecciones municipales que le siguieron demostraron una notable salud democrática en el peor de los escenarios.

Es imposible, en todo caso, obviar las graves deficiencias del Estado en Colombia. La principal, la incapacidad para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esta es la mejor receta para el colapso. Para evitarlo Colombia necesita ayuda masiva, y la comprensión en el exterior de la naturaleza de su problema. El laberinto colom-

biano es un típico caso de terrorismo y como tal debe ser analizado. El problema colombiano ofrece a los posibles Estados que acudan en ayuda de Bogotá numerosos riesgos. El apoyo al Plan Colombia, las ayudas antiterroristas de Estados Unidos y la colaboración económica son básicas, pero generan desconfianza. Entre muchos colombianos porque temen que la ayuda extranjera agrave el problema; entre norteamericanos y europeos por el miedo a verse envueltos en una guerra interminable; entre los vecinos colombianos porque temen el contagio.

La difícil vecindad

La prueba más clara de la falta de realismo con el que se ha tratado la crisis colombiana la encontramos entre sus vecinos. Hasta ahora ha sido imposible poner en marcha una política coordinada en la región sobre este asunto. Ni siquiera ha sido posible que todos los Estados que comparten frontera con Colombia califiquen formalmente a las FARC, al ELN o a las AUC como grupos terroristas (solo Panamá lo ha hecho). La incapacidad que demuestran los Estados latinoamericanos para enfrentarse a esta, y otras, crisis de forma unida es extraordinaria, casi irritante, habida cuenta de la

trascendencia de la crisis. La intervención de los EE UU suele esgrimirse como argumento que explica las diferencias, aunque también puede considerarse lo contrario. Si los latinoamericanos no solucionan sus problemas, que afectan a los demás, alguien de fuera tendrá que hacerlo. No sólo los EE UU, otros países han considerado más útil actuar directamente. Es el caso de Francia y su intento de liberar a la señora Betancourt secuestrada en Colombia desde hace más de un año. La política de Ecuador, Perú, Brasil o Venezuela es, bien ambigua, como sucede con el gobierno Chávez en Venezuela, o la simple negación de la realidad. De esa manera se evita tomar decisiones drásticas relativas a los refugiados, al control fronterizo o a la colaboración con fuerzas militares colombianas.

En definitiva se intenta evitar cualquier contacto con el conflicto. De hecho se teme que la política activa de Uribe obligue a los grupos guerrilleros a buscar refugio en suelo extranjero, trasladando con ellos la corrupción, el contrabando y la violencia acostumbrada. Desde luego el mito revolucionario, en el que se amparan el ELN y las FARC, y la tradición diplomática latinoamericana de no injerencia en asuntos inter-

nos de otros Estados no facilita la cooperación, máxime cuando la tendencia ideológica de los gobiernos de Brasil, Ecuador y Venezuela apunta a una izquierda de corte populista.

Se han producido algunos cambios prometedores. Países como Argentina, Chile, Paraguay o Bolivia han declarado públicamente su apoyo al gobierno colombiano. La postura de Lucio Gutiérrez en Ecuador es infinitamente más beligerante que la de Chávez en Venezuela, resuelto a no hacer nada o a adoptar una postura claramente favorable a las FARC. Pero no está claro que estas muestras de simpatía puedan superar los complejos que impiden analizar la crisis con una proyección razonable en el tiempo. La falta de atención que recibe el problema recuerda mucho a la actitud de la clase política colombiana, que lleva muchos años sin hacer todo lo posible por resolver la crisis.

Es poco probable que, de continuar, la crisis colombiana no afecte a los países vecinos. La falta de comprensión de los mecanismos de la globalización salta a la vista. Las leyes de este fenómeno hacen inexorable el contagio, como demuestran las incursiones guerrilleras producidas en Panamá, la presencia permanente de

guerrilleros en Venezuela, los contactos con Sendero Luminoso o el creciente tráfico de drogas en la región fronteriza con Venezuela y Brasil.

Conclusión

Colombia está todavía lejos de convertirse en un Estado fallido. Al contrario, mantiene con vigor instituciones esenciales en un Estado estable y democrático. Pero las dificultades de su gobierno para atajar los problemas de orden público generados por grupos terroristas generan riesgos que conviene valorar adecuadamente. Una política antiguerrillera enérgica, como la seguida por Álvaro Uribe, tendente a controlar todo el territorio nacional, reforzar los controles fronterizos y buscar el apoyo de los Estados vecinos, es estrictamente necesaria.

Urge elaborar una estrategia regional para enfrentarse al problema, superando las reticencias estratégicas o ideológicas de algunos gobiernos. Hasta ahora los intentos de Colombia por asegurarse la cooperación de Ecuador, Perú o Brasil han sido poco eficaces, pero han sentado la base de una posible cooperación futura inevitable si se desea anular la crisis antes de que afecte a otros Estados. ■